



**DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**  
**TRIBUNAL SUPERIOR. SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL**  
**MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA**  
***"Al servicio de la justicia  
y de la paz social"***

**A - 075**

**Proceso:** Verbal

**Demandante:** Tradición del Campo S.A.S.

**Demandada:** Patrimonio Autónomo Lote Palmas.

**Radicado Único Nacional:** 05266 31 03 001 2017 00441 01

**Asunto:** Resuelve recurso de súplica.

**Tema:** artículo 327, numerales 2º, 4º y 5º del CGP, alcances.

**Medellín, dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023)**

Procede la Sala Dual a resolver el recurso de súplica interpuesto por el apoderado de la parte demandada, en contra del auto proferido el 9 de marzo del presente año por el H. Magistrado sustanciador Julián Valencia Castaño, mediante el cual se despachó de manera desfavorable una solicitud de decreto de pruebas en segunda instancia.

**ANTECEDENTES**

Por auto del 9 de junio de 2022, el magistrado sustanciador admitió el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida en primera instancia el 16 de mayo de 2021. Dentro del término de ejecutoria de la prenotada admisión, la apelante solicitó conforme el artículo 327 numerales 2º, 4º y 5º del CGP., el decreto de las siguientes pruebas: **1.** Como prueba trasladada, la declaración rendida por el Sr. Luis José Botero Salazar

al interior del proceso con radicado 05266315300120150012902 y **2.** Como pruebas documentales: «**a.** *Acta de Constitución de la sociedad Del Campo por Tradición SAS (Hoy Tradición del Campo SAS) de fecha 01 de noviembre de 2011.* **b.** *Acta No 3 de Asamblea de Accionistas de la sociedad Del Campo por Tradición SAS (Hoy Tradición del Campo SAS) de fecha 26 de noviembre de 2013 – capitalización en dinero y reforma estatutos.* **c.** *Acta No 5 de Asamblea de Accionistas de la sociedad Del Campo por Tradición SAS (Hoy Tradición del Campo SAS) de fecha 17 de marzo de 2014- cambio de razón social y designación de representante legal.* **d.** *Acta No 8 de Asamblea de Accionistas de la sociedad Tradición del Campo SAS de fecha 17 de junio de 2014 renuncia de representante legal.* **e.** *Acta No 18 de Asamblea de Accionistas de la sociedad Tradición del Campo SAS de fecha 08 de mayo de 2017».*

El recurrente en súplica acomoda la denotada petición de la siguiente manera:

**1)** Invoca la causal 2º del artículo 327 del CGP., para expresar que, la declaración rendida por el Sr. Luis José Botero Salazar al interior del proceso con radicado 05266315300120150012902, fue solicitada en primera instancia como “prueba trasladada”; petición acogida y decretada en tales términos en la respectiva audiencia inicial. No obstante, señaló que, nunca se practicó dicha prueba porque el juzgado de primera instancia en ningún momento ofició a la respectiva autoridad judicial que la custodiaba con tal de que procediera con su remisión a este proceso. Por ende, considera que tal omisión no le es atribuible. **2)** Alega la causal 4 del artículo 327 ibídem, para señalar que como la parte demandada, en su réplica, dijo no constarle los hechos primero, segundo y noveno de la demanda, vinculados, respectivamente, con la constitución de la sociedad Tradición del Campo S.A.S; que su única socia es la señora Elena María González Trujillo; y, con la explotación económica de dicha compañía, correspondía a la parte demandante, la carga de «*probar su afirmación, en especial la hipótesis de que trata el hecho noveno de su demanda, los cuales la demandante quiso probar a través de las declaraciones de parte y testimonios, como si esa fuera la prueba idónea para el efecto; es decir, que conociendo y teniendo bajo su poder y custodia*» las actas que fueron allegadas con la petición probatoria que nos ocupa, «*nunca las quiso aportar al presente proceso, las cuales se obtuvieron del cardex que lleva la*

*Cámara de Comercio de Medellín», constituyéndose así en una prueba que no fue aportada por obra de la parte contraria. 3) Fundamenta la causal 5° en el hecho de que tanto la prueba trasladada como las actas de la sociedad Tradición del Campo SAS, antes citadas, apuntan a que «se puede probar que lo expresado por el señor LUIS JOSE BOTERO SALAZAR dentro de su testimonio en este trámite es diverso de lo que manifestó en su interrogatorio de parte dentro del proceso de restitución del inmueble que aquí nos convoca ... De la misma manera, estas pruebas desvirtúan el dicho de la señora ELENA MARIA GONZALEZ TRUJILLO y de su hijo (testigo tachado) el joven JOSE LUIS BOTERO GONZALEZ quienes mencionaron en sus declaraciones aspectos totalmente diferentes respecto del socio creador de la sociedad aquí demandante y del aporte en especie (lote y mejoras) a la misma».*

El magistrado sustanciador, por auto del 9 de marzo de 2023, negó la preindicada petición tras considerar que no reunía los requisitos del artículo 327 del CGP. Lo anterior, porque estimó que dicha solicitud sólo cumplía el propósito revivir oportunidades desperdiciadas, pues precisó que, si bien el juzgado de origen no libró los respectivos oficios comunicando la necesidad de incorporar la prueba trasladada rogada por la pasiva, lo cierto es que «*dicha prueba fue decretada a cargo de [ella] y, como interesada, no se observa en el trámite subsiguiente ningún pedimento o gestión dirigida al Despacho en tal sentido, siendo de su entera carga y obligación traerla al proceso*». Así mismo, indicó: «*Recuérdese que el artículo 167 del Código General del Proceso indica que es el interesado en la prueba quien debe desplegar las actuaciones tendentes a probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, actuaciones que no se limitan a la simple petición de la prueba, sino a todos los actos requeridos para la consecución de la misma, por consiguiente, para lo que interesa a esta función jerárquica que nos congrega, no se observa la correspondencia entre las pruebas solicitadas en sede de apelación de sentencia y esos únicos casos en que ella es procedente*».

Disconforme con lo decidido, la parte demandada interpuso recurso de súplica, expresando que el auto recurrido quedó huérfano de argumentos porque «*nada dijo respecto de la negativa de la prueba documental aportada,*

*es decir, la providencia no se pronunció de manera completa sobre los dos (2) medios probatorios rogados quedando incompleta esa decisión», esto es, «(i) una prueba documentaria que se allegó con el escrito de solicitud y (ii) una prueba trasladada consistente en el testimonio del señor LUIS JOSE BOTERO SALAZAR». Adicionalmente, insistió: «es evidente que la decisión aquí impugnada no cumple con una suficiente motivación o justificación que fundamente su decisión, además de haber resuelto parcialmente la solicitud probaría quedando pendiente su pronunciamiento frente a la prueba documental allegada, lo cual es disonante con el deber contenido en el Art 42-7 del CGP». Y finalmente, expresó: «el magistrado no dio aplicación al último inciso del Art 167 del CGP el cual expresa que "(...) los hechos notorios, y las negaciones y afirmaciones indefinidas no requieren de prueba". En el memorial de solicitud de pruebas se indicó que el demandante afirmó indefinidamente los Hechos Primero, Segundo y Noveno de su demanda a lo cual se contestó de manera negativa generan la inversión de la carga probatoria en cabeza del demandante quién no aportó los documentos de constitución de la sociedad que hoy demanda; pero más allá de ello, estos documentos desdicen las declaraciones del representante legal de la sociedad demandante y son la legítima verdad la cual debería estar por encima del derecho procesal y eso debería tener más valor al momento de resolver sobre la pertinencia de esta prueba documental».*

### **CONSIDERACIONES**

De acuerdo con el artículo 331 del CGP, el recurso de súplica que aquí interesa resulta procedente porque con él se pretende censurar una decisión que por su naturaleza sería apelable: numeral 3º del artículo 321 ibídem. Además, fue presentado en debida forma y dentro del término legal oportuno.

El recurrente en súplica fustiga el auto emitido por el magistrado sustanciador, por no haberlo motivado suficientemente, pues echa de menos argumentos que den a entender las razones por las que se negó su petición de prueba trasladada (declaración rendida por el Sr. Luis José Botero Salazar al interior del proceso con radicado 05266315300120150012902) y el decreto de las documentales con las que acompañó tal solicitud, las cuales, según él,

debieron decretarse por reunir los requisitos establecidos en los numerales 2º, 4º y 5º del artículo 327 del CGP.

Pues bien, la citada norma establece:

«Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelación de sentencia, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los siguientes casos: ... 2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió... 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. 5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior».

El precepto referenciado dispone un escenario excepcionalísimo para que, en el grado jurisdiccional de la apelación, las partes pueden solicitar el decreto o la práctica de las pruebas que no pudieron hacer valer dentro de las oportunidades probatorias establecidas en primera instancia. Lo anterior, siempre y cuando se acrediten unas específicas circunstancias que la Ley procesal previó para el efecto.

En este asunto, se alegan tres circunstancias: 1. Pese a que la prueba trasladada (declaración del Sr. Luis José Botero Salazar) se decretó en primera instancia, nunca se logró incorporar al proceso (practicarse) porque el señor juez *a quo* no comunicó su decreto a la autoridad que tiene en su poder dicha prueba, es decir, esta no se practicó oportunamente por culpa del juzgado, más no de quien la pidió, esto es, el demandado -hoy recurrente en súplica-; 2. Las pruebas documentales (cfr. Actas obrantes en archivos 07 a 11 C-02SegundaInstancia), no pudieron aducirse en primera instancia por obra de la parte contraria; y 3. Con dichas actas se pretende desvirtuar las declaraciones de los señores «*LUIS JOSÉ BOTERO SALAZAR*» y «*la señora ELENA MARIA GONZALEZ TRUJILLO y de su hijo (testigo tachado) el joven JOSE LUIS BOTERO GONZALEZ*».

Pues bien, descendiendo al estudio de las causas invocadas como fundamento de las peticiones probatorias, se considera:

1. El numeral 2º del artículo 327 del CGP, exige la existencia de una prueba que haya sido solicitada, decretada y no practicada en primera instancia por circunstancias no atribuibles a la desidia de quien la solicitó. Y sobre este preciso punto, debemos establecer las cargas que deben cumplir las partes al momento de acreditar los hechos con que fundamentan sus pretensiones o excepciones, pues el incumplimiento de estas denota la negligencia que impide decretar en segunda instancia las pruebas que debieron practicarse en su debida oportunidad.

Así pues, el artículo 167 del CGP., consagra:

«**Incumbe a las partes probar** el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen» (resalto Tribunal).

Así mismo, el artículo 173 ibídem, dispone:

«Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso **dentro de los términos y oportunidades** señalados para ello en este código» (resalto Tribunal).

Y, el artículo 78 numeral 8º del mismo estatuto procesal, regula:

«Son deberes de las partes y sus apoderados: (...) **Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias**» (resalto Tribunal).

Es claro que nuestra Ley procesal impone a las partes la obligación de realizar toda gestión a su alcance para probar los hechos generadores de los efectos que esperan obtener en un determinado juicio (art. 167 CGP); tanto es así, que, deben «*Prestar al juez su colaboración*» en el recaudo de los medios probatorios que solicitaron (art. 78 núm. 8º CGP) hasta el punto de verse obligados a poner de presente ante el juez cualquier descuido en que este hubiese podido incurrir en relación con alguna de las pruebas decretadas, pues ello significa en sentido estricto “**colaboración**”, por lo que el incumplimiento de dicho deber evidencia desinterés en la práctica de la prueba solicitada y decretada en primera instancia, impidiendo que sea recaudada para luego ser apreciada por el(a) juez, porque el principio de preclusión se lo prohíbe (art. 173 CGP).

Así, entonces, la falta de diligencia y colaboración en la práctica de una prueba que a petición de parte se ha decretado, equivale a desconocer la carga probatoria que siguiendo la regla del artículo 167 del CGP corresponde a quien pretenda acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido. Obsérvese que, en este proceso, en la audiencia inicial celebrada el 10 de marzo de 2022, el juzgado decretó la siguiente prueba: *«Se ordenó oficiar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad de Bogotá, para que, con destino a este proceso, remita copia del interrogatorio de parte absuelto por el señor Luis Botero Salazar, en el proceso con radicado 2015- 00617-00. Igualmente se ordenó la expedición o reproducción de igual pieza procesal, esto es, del interrogatorio del señor Luis Botero Salazar, en el proceso que cursó en este despacho, con radicado 2015-00129-00, que en la actualidad se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Medellín»* (cfr. Archivo 10 C-01PrimeraInstancia). Pero no existe constancia alguna que dé cuenta de la práctica de la prueba trasladada, esto es que la misma haya sido incorporada al presente proceso; sin embargo, tal omisión no puede atribuirse únicamente al juzgado, tanto más cuando bien podía la recurrente en súplica, apropiarse de las acciones encaminadas a su práctica, pues el artículo 78 núm. 8º del CGP, no sólo la facultaba, sino que la conminaba a hacerlo.

Es que la incorporación de una determinada prueba trasladada, no depende exclusivamente de la comunicación que sobre el particular pudiera existir entre las autoridades jurisdiccionales. Nótese que el artículo 174 del CGP., consagra: *«Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y **serán apreciadas sin más formalidades**, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella»*. Lo anterior, significa que la incorporación de la copia de la mentada prueba, no está sujeta a más formalidad que la simple adjunción al expediente –lo cual puede hacerse a través de cualquier medio-. Luego, la parte interesada estaba facultada para anexarla –así sea a través del ejercicio del derecho de petición-, sin que medie para el efecto un oficio por parte del Juzgado que la decretó, pues la norma procesal en comento no impone dicha carga. Y comoquiera que lo anterior no sucedió, debe concluirse que la demandada fue negligente en la práctica de

la prueba que en esta oportunidad pretende recuperar. Por ende, no se halla probada la hipótesis normativa prevista en el numeral 2º del artículo 327 del CGP.

**2.** Delanteramente debe precisarse que la causal 4º de que trata el artículo 327 del CGP, se refiere a la prueba que verse sobre «**documentos** que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria».

En esta oportunidad la suplicante expresó que la prueba documental que no pudo allegarse por obra de su contraparte corresponde a los documentos visibles en los archivos 07 a 11 del cuaderno de segunda instancia, concernientes a las copias de las actas de la sociedad Tradición del Campo S.A.S. No obstante, la conducta que se atribuye a la parte demandante, y en la cual se apoya la petición probatoria, se reduce a que aquella quiso probar los hechos relativos a las mencionadas actas, «*a través de las declaraciones de parte y testimonios, como si esa fuera la prueba idónea para el efecto; es decir, que conociendo y teniendo bajo su poder y custodia dichas actas nunca las quiso aportar al presente proceso, las cuales se obtuvieron del cardex que lleva la Cámara de Comercio de Medellín*». En tal sentido, de esas circunstancias fácticas no se extractan hechos indicativos de conductas de la parte demandante que hayan impedido a la demandada la incorporación de las actas que en segunda instancia reclama; por el contrario, todo apunta a que lo pretendido no es más que revivir oportunidades probatorias desperdiciadas.

Es que, en realidad, al examinar la confusa petición probatoria se percibe el desvío en el entendimiento del numeral 4º del artículo 327 del CGP, en tanto que para la estructuración de la causal allí prevista debe evidenciarse que la fuerza mayor, ora el caso fortuito o el obrar de la contraparte, esta última aquí alegada, impiden el recaudo probatorio. No se trata de una prueba documental circunscrita al querer del solicitante en segunda instancia, como al parecer lo sugiere el recurrente, pues al decir de este debía su contraparte allegar las actas preindicadas; lo cierto es que la prueba documental debe ser aquella que ha sido obstaculizada a quien pretende valerse de la misma, lo



que no se aprecia en este caso. Es más, véase que el recurrente reconoció haber obtenido esa prueba documental *«del cardex que lleva la Cámara de Comercio de Medellín»*, por lo que es apenas razonable entender que estas no están sometidas a reserva legal y, por consiguiente, bien podía incorporarlos en primera instancia dentro de las oportunidades legalmente establecidas para el efecto.

**3.** Por otro lado, las notorias imprecisiones de los supuestos invocados para fundar la causal prescrita 5º del artículo 327 del CGP., conducen a confirmar lo decidido por el magistrado sustanciador. Véase que la parte interesada no pretende desvirtuar **documentos**, que es el supuesto previsto en el canon antes citado para la viabilidad de la prueba en segunda instancia, sino que lo anhelado es *«probar que lo expresado por el señor LUIS JOSE BOTERO SALAZAR dentro de su testimonio en este trámite es diverso de lo que manifestó en su interrogatorio de parte dentro del proceso de restitución del inmueble que aquí nos convoca ... De la misma manera, estas pruebas desvirtúan el dicho de la señora ELENA MARIA GONZALEZ TRUJILLO y de su hijo (testigo tachado) el joven JOSE LUIS BOTERO GONZALEZ quienes mencionaron en sus declaraciones aspectos totalmente diferentes respecto del socio creador de la sociedad aquí demandante y del aporte en especie (lote y mejoras) a la misma»*. En ese orden sin necesidad de ahondar en más argumentos es claro que no están dados los presupuestos para la estructuración la denotada causal.

Finalmente, ningún reproche puede hacerse al auto examinado por no haber dado *«aplicación al último inciso del Art 167 del CGP»*, en tanto que no es este el escenario procesal para establecer o calificar el mérito de las afirmaciones y negaciones indefinidas de las partes, pues se trata de una valoración reservada para la sentencia y que no está consagrada en el artículo 327 del CGP, como situación habilitante para el decreto de pruebas en segunda instancia.

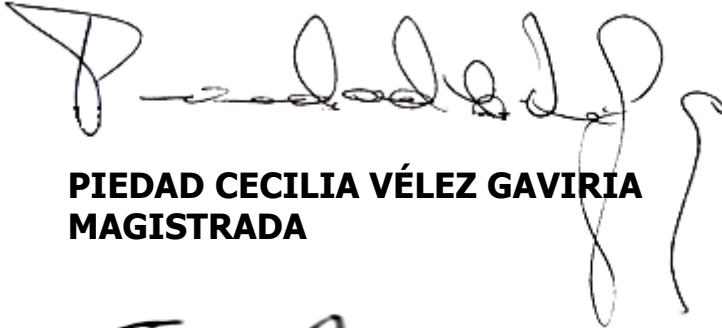
En mérito de lo expuesto, esta Sala dual,

**RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto suplicado, por las razones expuestas.

**SEGUNDO:** Devolver el asunto al Despacho del Magistrado ponente.

**NOTIFÍQUESE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piedad Cecilia Vélez Gaviria', with a long horizontal stroke and a large loop at the end.

**PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA  
MAGISTRADA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Sosa Londoño', with a stylized 'J' and 'C'.

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO  
MAGISTRADO**

(Viene con firmas originales de Radicado Único Nacional 05266 31 03 001 2017 00441 01)